

# SOBRE LA ESPAÑA DESHEREDADA Y OTRAS ZARANDAJAS

**ANTONIO FLORES**

Ingeniero agrícola

El concepto de la España vaciada, constituye una falsa y exitosa novedad como tantas otras. Ya en los últimos años del siglo XIX, la época del regeneracionismo, se definió como objetivo nacional la recuperación de lo que se denominó «las provincias desheredadas y de desigualdad escandalosa», entre las que se encontraban prácticamente todas las que hoy siguen afrontando el abismo proceloso de la despoblación.

Porque, como ejemplo, conviene recordar que la comarca más despoblada del continente europeo no se encuentra en las estepas rusas, ni en las zonas escandinavas situadas al norte del Círculo Polar Ártico. Está a poco más de 100 Km de Madrid. Se trata de una comarca irregular a caballo entre las provincias de Cuenca, Guadalajara y Teruel, con prolongaciones que se extienden hacia Soria, el sur de Zaragoza y el este de Segovia. Tiene menos de 2 habitantes por Km cuadrado y aún sigue, lentamente, despoblándose. Como referencia, la cuasipolar Islandia alcanza los 3 habitantes por Km cuadrado.

Pero esta comarca solo constituye el vértice de nuestro iceberg demográfico, un desierto poblacional que se extiende por cinco comunidades autónomas con una extensión de más de 65.000 Km cuadrados (El 13% de España). Incluye municipios de las provincias de Teruel y Zaragoza en Aragón; Cuenca y Guadalajara en Castilla-La Mancha; Burgos, Segovia y Soria en Castilla y León; Castellón y Valencia en la Comunidad Valenciana, y La Rioja. Solo cuatro de ellos tienen más de 10.000 habitantes: Cuenca, Soria, Teruel, y Calatayud. La densidad de esta vasta zona, vertebrada por el sistema Ibérico, es en la actualidad inferior a los 7 habitantes por Km<sup>2</sup> menor que la nórdica Laponia, que alcanza los 8, y muy inferior al límite de 10 que la geografía humana establece como límite para definir un desierto demográfico.

Esta situación no es exclusiva, ni mucho menos de lo que podríamos llamar la zona Ibérica, o mejor celtibérica, como fue tradicionalmente conocida. Existen otros desiertos demográficos en nuestro país, como las comarcas fronterizas con Portugal en las provincias de Orense, Zamora, Salamanca y Cáceres, el interior de Galicia o las zonas de dehesa en Extremadura, La Mancha y Andalucía. En conjunto la España desheredada abarca más del 55% del territorio nacional.

Por otra parte, conviene destacar que población escasa no es sinónimo de despoblación. Islandia y Laponia tienen una población escasa, consecuencia de sus limitaciones geográficas y climáticas, pero se trata de una población estable, que no ha sufrido graves altibajos en los últimos decenios, incluso crece lentamente en el caso de Islandia. Pero el fenómeno que atraviesan nuestras provincias desheredadas es muy diferente. Se trata de un abandono torvo, calculado y creciente. Las zonas de las que

estamos hablando no tienen un clima insoportable, como las escandinavas, ni carecen de recursos, ni son inhabitables. No les faltan tierras fértiles, agua abundante, temperaturas moderadas, ni tampoco riquezas forestales, mineras o paisajísticas. Existen otras razones.

El espacio que podemos denominar como «celtibérico» tenía en los años 40 una población de alrededor de un millón de personas. Hoy tiene 450.000 en números redondos. La gran despoblación se produjo como consecuencia de la tremenda emigración de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo que redujo en más de 400.000 el número de habitantes. Desde entonces se sigue perdiendo población, aunque a un ritmo menor, como consecuencia de la crisis de la demografía y el creciente envejecimiento. Y lo peor está por venir, porque en gran parte de la zona el índice de envejecimiento está por encima de 400/100, lo que significa que hay más de 4 personas mayores de 65 años por cada menor de 15 años. Se aproxima pues una verdadera catástrofe demográfica, porque en poco más de diez años la especie humana se habrá extinguido allí. Y con ella una memoria, esta sí verdaderamente histórica. Porque no quedará nadie, ni tan siquiera para recordar.

Vale de poco analizar las causas, pero es imprescindible para entender dónde estamos. La gran despoblación de los 50-60 fue consecuencia del desarrollismo. La política económica del franquismo inicial incluía aspectos como la colonización interior, la extensión de los regadíos, las grandes zonas de interés nacional, que buscaban llevar el desarrollo a la gente, contribuir a su bienestar y a su capacitación en el lugar en el que vivían y trabajaban. Se fomentaba la pequeña industrialización y la mejora de los equipamientos rurales. España está llena por doquier de escuelitas abandonadas, mataderos de pueblo, lavaderos públicos, fábricas de luz, estaciones de tren y otras múltiples iniciativas. El desarrollismo de los 60, a partir del Plan de Estabilización del 56 invirtió la tendencia, que renunció a llevar el desarrollo a la gente y provocó, con toda la buena intención que se quiera, que la gente tuviese que emigrar hacia el desarrollo.

Hubo, que duda cabe, un crecimiento económico intensivo, pero muy desigual espacialmente hablando. Las consecuencias de los desequilibrios territoriales que se provocaron están a la vista. España posee una de las estructuras territoriales más deficientes del mundo, con la mayor parte de la población amontonada en las costas, los valles de los grandes ríos y la isla de Madrid. Estas zonas suponen tan solo el 20% del territorio nacional, mientras que otro 55% está en proceso de despoblación, como ya hemos dicho.

La transición no sirvió de ningún alivio para esta tendencia, más bien al contrario. Los procesos de «concentración», «racionalización» y «eficiencia» de los recursos y acciones públicas se llevaron de los pueblos a la gente más preparada e influyente, los médicos, los practicantes, los maestros, los veterinarios, los farmacéuticos, los guardias civiles, los agentes del servicio de extensión agraria y en general todos los servidores públicos, que en muchos casos estaban obligados a residir en los lugares donde prestaban sus servicios. Con ellos se llevaron una gran parte de la iniciativa, el ejemplo, la presencia institucional, las dotaciones. El desastre que aquello supuso para la vida de los pueblos nunca estará lo suficientemente valorado.

Los expertos en desarrollo rural, entre los que modestamente me cuento, llevamos toda la vida advirtiendo de la complicada situación que atravesaba la demografía de



*Pueblo abandonado de la España desierta*

una gran parte de nuestras zonas rurales. Hace ya más de treinta años en alguno de los informes que elaboré destacaba que las tendencias de fondo de la evolución del tejido socioeconómico de una gran parte de las zonas rurales conspiraban contra la supervivencia de las mismas. Y que no bastaba con regar con subvenciones a los agricultores, ni construir una red de carreteras eficiente con las ayudas europeas.

Se ha tratado de acciones positivas, quien lo puede discutir, pero con consecuencias muchas veces deplorables. Como dijo Julio Senador en alguno de sus escritos: «Por fin llegó la carretera a Gallinejas de la Serranía. Era una reivindicación que se arrastraba secularmente. Los habitantes lo celebraron y a continuación se marcharon por ella». No es una cita textual. En un número asombroso de casos, la mejora de las comunicaciones ha contribuido al abandono de los pueblos, porque ha facilitado que los agricultores trasladaran su residencia a las capitales y cabeceras de comarca, a habitar las modernas viviendas adquiridas con las subvenciones de la PAC, mientras se desplazaban cotidianamente a sus explotaciones.

Los saltos tecnológicos y las tendencias comerciales están añadiendo impactos negativos para lo que queda de tejido socioeconómico en muchas comarcas. Ya la proliferación de hipermercados en los núcleos de población de mediano tamaño supuso un terrible golpe para el comercio de proximidad asentado en pequeños núcleos de población. La desaparición de las tiendas generalistas ha precedido a la deslocalización de los talleres y del imprescindible comercio de alimentación y primera necesidad. Por último la pandemia y Amazon están contribuyendo a extinguir lo que iba quedando. Hasta las sucursales bancarias están desapareciendo en un escenario de «fin de trayecto» que anticipa la desaparición final de varios millares de núcleos de población en los próximos 10 años.

Es cierto que se han dedicado grandes recursos a compensar esta situación: Se han construido ambulatorios rurales, centros de enseñanza y carreteras, entre otras infraestructuras; se han financiado innumerables instalaciones de turismo rural y apo-

yado a numerosas iniciativas de desarrollo local; pero los resultados son insuficientes y no compensan el deterioro demográfico y la desestructuración social crecientes.

En la actualidad se está llegando a un punto de no retorno que se puede resumir, entre otros, en los siguientes factores:

- Una tremenda crisis demográfica que afecta de forma dramática a la natalidad y a la nupcialidad. Afecta a todo el país, pero especialmente a las zonas rurales. Los cien mil abortos anuales, suponen una sangría poblacional de consecuencias tremendas, que casi nadie se plantea afrontar.
- Una tasa de masculinización creciente en prácticamente todas las comarcas de base agraria. Emigran los jóvenes, pero sobre todo los de género femenino. Resultados: crecen la prostitución y el consumo de pornografía, con implicaciones sociales y morales devastadoras.
- Un avance del envejecimiento de rapidez creciente. La pirámide demográfica se ha transformado en un rombo y tiende a convertirse en una pirámide inversa, con el vértice hacia abajo que precisará de recursos impresionantes para asegurar una vida digna a crecientes colectivos de ancianos solitarios y desamparados. Como dato lleno de significado: La edad media de los agricultores es de 61 años.

Abandono de extensiones crecientes de terrenos de cultivo, que van degradándose por la ausencia de las imprescindibles tareas de mantenimiento y convirtiéndose en eriales que solo producen matorrales y hierbajos.

Esta situación difícilmente puede revertirse porque: primero depende de las tendencias de fondo reinantes en la propia población rural, que en gran parte asiste, impasible, a su propio declive. Segundo la acción pública es insuficiente y muchas veces negativa y demuestra una demoledora y creciente dependencia de las ideologías y complejos urbanitas en detrimento de las realidades rurales. Un ejemplo lo constituye la protección innecesaria del lobo en detrimento de la ganadería extensiva. O la extensión de las instalaciones de energías alternativas, que van inundando zonas agrícolas irremplazables y contaminando los paisajes que constituyen una gran parte del activo estético de nuestros campos. Al tiempo que eliminan los puestos de trabajo destinados al cultivo de las tierras abandonadas. Y sobre todo las imposiciones ambientalistas, cuyas exigencias, muchas veces excesivas, ponen en peligro la supervivencia de muchas explotaciones.

No es fácil encontrar salidas esperanzadoras ante una situación como la descrita. La dinámica social moderna va conduciendo por doquier a una concentración creciente en las grandes aglomeraciones urbanas. No se trata de un fenómeno de carácter únicamente español, afecta a la práctica totalidad del mundo y tiene una tendencia aparentemente irreversible. En nuestro caso los desequilibrios económicos y políticos son un factor añadido que determina flujos de población hacia las zonas más favorecidas en detrimento de las más olvidadas por el progreso.

A esta situación contribuye el desprestigio creciente de la agricultura, acusada por el dogmatismo ecologista de ser la causante de una gran parte de los desastres ambientales que afectan al planeta y la propia depresión de los agricultores, que muchas veces orientan a sus hijos a buscar ocupaciones distantes del mundo rural, en las que presumen encontrarán posibilidades que se les niegan en su terruño nativo.

Las soluciones que se han propuesto, han contribuido a retrasar procesos que parecen inevitables, mediante intervenciones y estímulos que solo tienen resultados puntuales y/o temporales pero que no se acumulan lo suficiente como para aventurar un posible cambio de tendencia. Hace falta imaginar una verdadera política de repoblación interior, como se ha dado en varios momentos de nuestra historia, pero no parece que exista la capacidad suficiente en nuestros dirigentes políticos sea cual sea su signo.

En este contexto las propuestas que se escuchan, llenas de buenas intenciones, parecen desconocer las realidades que deben afrontarse y que son tercas, como las mulas de los arrieros. Vamos a hablar sobre ellas:

Una propuesta bienintencionada pero llena de ingenuidad es la de fomentar la emigración de la ciudad al campo. Se han hecho múltiples intentos, con indiscutible éxito en algún caso, pero siempre de pequeña envergadura. Existen varios tipos de urbanitas sensibles a la posibilidad de cambiar su forma de vida. Están los marginales, personas que piensan que lejos de la ciudad van a encontrar un paraíso arcádico en el que escapar a sus angustias personales y a su insatisfacción vital. A veces suelen ocupar, de forma comunal, aldeas remotas abandonadas, muchas veces sin autorización de los legítimos propietarios. Suelen ser tolerados e incluso a veces bien recibidos, pero sus horizontes también suelen ser muy estrechos. No construyen propuestas atractivas para personas ajenas a sus limitados perfiles ideológicos y por ello a menudo acaban en pequeños grupúsculos endogámicos sin proyección ni verdadera incidencia en el entorno.

También están los inquietos insatisfechos del mundo yuppie. Suelen ser profesionales liberales, artistas, trabajadores intelectuales y en general gente con la vida resuelta y proyectos realizables. Pero son altamente individualistas y su modelo no puede ser contagioso. A veces refuerzan relativamente a colectivos rurales envejecidos, sobre todo en zonas de naturaleza feraz y valores estéticos apreciables pero no construyen un tejido social estable. La llegada del teletrabajo permite especular con el crecimiento de esta tipología, pero las limitaciones de las infraestructuras de comunicación en las «provincias desheredadas» suponen una considerable limitación.

Luego tenemos a los urbanitas exiliados, como consecuencia de las dificultades que les supone la vida en los entornos urbanos. Hay muchos tipos de exiliados pero los más numerosos son los jubilados, que establecen allí su vivienda, más o menos temporal y contribuyen a dinamizar el comercio y la actividad de los pueblos, pero con un horizonte temporal reducido y limitado, porque carecen de posibilidades de sucesión.

Los inmigrantes podrían ser una posible solución para el vacío demográfico y de hecho ya están desempeñando un importante papel, aunque limitado a las zonas donde existe una agricultura rentable y que necesita una mano de obra que ya no proporciona la población autóctona. En muchas partes de España ni la agricultura ni la ganadería, ni la pesca serían posibles sin el recurso a los trabajadores venidos de allende de nuestras fronteras. Son indispensables también para todas las tareas que rechaza la población nativa: La hostelería, los servicios sociales, las tareas domésticas, la construcción, el cuidado de ancianos,...

Sin duda el estímulo al establecimiento de inmigrantes y refugiados en las comarcas desheredadas puede llegar a ser un factor positivo para su demografía, aunque también supone un riesgo no desdeñable porque puede conducir a una sustitución de

la población autóctona por colectivos indiferentes a los valores comunes y al secular patrimonio cultural. Además los inmigrantes suelen verse afectados con rapidez por las tendencias demográficas de fondo que caracterizan al medio rural. Sufren las mismas carencias de servicios que los pobladores originales. No encuentran ocupaciones atractivas para mejorar sus expectativas vitales. Y sus hijos asumen con facilidad los usos de los jóvenes españoles y son atraídos con la misma fuerza por el espejismo de la vida en las grandes ciudades.

La historia nos ha enseñado que situaciones similares se han atajado con actuaciones mucho más decididas y de mayor alcance. Ya en la alta Edad Media los fueros y cartas pueblas consiguieron atraer la población a las fronteras mediante políticas decididas de repoblación, que otorgaban ayudas y privilegios a cuantos se asentaban en ellas. También en la Edad Moderna se desarrollaron políticas orientadas a la repoblación interior que culminaron en el siglo XVIII con las grandes repoblaciones, atrayendo incluso a personas procedentes de otras zonas de Europa. Y que tuvieron continuidad en la época contemporánea, con la acción de los regeneracionistas y las políticas de colonización interior del franquismo.

Existen también ejemplos actuales en otras naciones aquejadas de problemas de despoblación y desequilibrios demográficos, que han planteado soluciones mucho más ambiciosas. Por ejemplo Noruega con su casi inhabitable Norte. En casi todos los casos se han adoptado medidas como las siguientes:

- Estímulo general a la demografía. La recuperación de la natalidad en general es imprescindible también para las zonas rurales. Y las medidas de estímulo deben prestar una atención especial al aborto. Además de sus gravísimas consecuencias morales y sociales, que una cuarta parte de los embarazos en España finalice en aborto hace imprescindible afrontar este tema con la mayor de las seriedades, porque afecta a la propia supervivencia de nuestra Patria.



*Arriscado pueblo español, abandonado también por sus moradores*

- Generación de fuentes de trabajo en las zonas desheredadas. La agricultura es insuficiente para mantener en ellas el tejido socioeconómico, es imprescindible impulsar una diversificación de actividades que proporcione fuentes de empleo estables y competitivas. Para ello las actividades que allí se implanten deben de contar no solo con ayudas directas y estímulos fiscales, como sucede hasta ahora. Es imprescindible introducir estímulos tarifarios suficientes como para compensar las desventajas competitivas. Deben establecerse políticas de discriminación positiva para las tarifas y las tasas. La energía, las telecomunicaciones y los servicios deben de resultar considerablemente más baratos, de forma estable, para que las empresas aquí se establezcan.
- Inversión pública en las zonas desheredadas desde luego. Pero también gasto presupuestario corriente. Los profesionales que cubran servicios deben ser contractualmente obligados a residir en las zonas rurales donde trabajen. Y deben ser competitivamente remunerados por ello. O sea, en Román paladino, deben de ganar sensiblemente más que quienes trabajen en las zonas cómodas. Ya se hace con algunas profesiones, por ejemplo los guardias civiles.
- Descentralización de los servicios públicos: No tiene sentido que los campos de prácticas del INIA estén próximos al centro de Madrid. Ni que las CCAA hayan reproducido a su nivel la macrocefalia de la administración General del Estado. Las administraciones y las numerosas empresas públicas y semipúblicas deben de contribuir a atraer a sus trabajadores a las zonas rurales mediante la creación en las mismas de centros de trabajo atractivos y bien pagados. Cuesten lo que cuesten. El anuncio reciente del establecimiento de una unidad militar en unas instalaciones abandonadas en la provincia de Zamora es un ejemplo de lo que se puede hacer si se toma en serio este problema.
- Creación de entornos cómodos y amables en las zonas rurales: Vivienda comunicaciones y servicios deben estar bien cuidados y atendidos. Y ser accesibles. La vivienda debe cuidarse de forma especial, incluso estableciendo nuevos centros de población mediante inversión pública o mixta. No es de recibo que una gran parte de los ambulatorios rurales carezcan de especialistas. O que no se cubran las plantillas de maestros, trabajadores sociales u otros tipos de servidores públicos imprescindibles.
- Fomento del teletrabajo desde las zonas rurales. Es impresentable en el siglo XXI que un tercio del territorio español carezca de adecuada cobertura de banda ancha. Las administraciones y las empresas deben favorecer a los trabajadores que realicen sus tareas desde el medio rural dándoles una significativa prioridad.

Y estas acciones de fomento deben de ir acompañadas por otro tipo de medidas que limiten o dificulten la implantación de actividades o inversiones en zonas ya saturadas. No tiene sentido instalar otra FORD en los naranjales más feraces de la llanura mediterránea, cuando a 50 Km hacia el interior hay superficies prácticamente desérticas, baratas y en las que es posible acceder a cualquier tipo de servicios. Ni resulta esperanzador que las mayores inversiones en ferrocarriles se vayan al corredor Mediterráneo, en beneficio fundamentalmente de Cataluña mientras esa España desheredada va perdiendo incluso la memoria de lo que significó el tren. ●